

Los desplazados, nuevo fenómeno migratorio

Ana María Aragonés

Profesora. Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Por qué a los desplazados no se les concede el estatus de refugiados?

Alessandro Sabiucciu

Los desplazados son un nuevo fenómeno migratorio en la historia del fin del siglo xx. Se trata de un comportamiento poblacional que se está repitiendo en todas aquellas regiones en las que los pueblos luchan por la democracia, la autonomía y el respeto a su identidad: Ruanda, Kosovo, Timor, Chechenia y, por supuesto, Chiapas.

Existe una marcada diferencia entre las condiciones que vivieron las poblaciones sometidas a las dos grandes conflagraciones mundiales de la primera mitad del siglo xx y lo que sucede al finalizar este, si bien la característica en ambos momentos es el abandono, por todos estos grupos, de sus regiones de origen. En el primer caso, aquellas poblaciones accedieron a diversos estatus legales, entre los que se destacan el de refugiados y el de apátridas. Como señala Hannah Arendt, al referirse al caso de la Alemania nazi, estas acciones presuponian una estructura estatal con rasgos nítidos de totalitarismo.

Pero, tanto refugiados como apátridas, estaban protegidos por las leyes internacionales y la comunidad de recepción se vería obligada a otorgarles los derechos derivados de tales legislaciones.

Los desplazados son también la consecuencia de un Estado autoritario, en el mismo sentido descrito precedentemente, pero estas poblaciones sufren una total desprotección legal, ya que no se les asigna un estatus reconocido por organismos internacionales y, por lo tanto, no hay ninguna obligación para las comunidades receptoras, más allá de ejercer la solidaridad humana, que por supuesto no es poca cosa.

El antecedente del término «personas desplazadas» surge en el marco de la Segunda guerra mundial, con el expreso propósito de liquidar el de apátrida —reconocido por los organismos internacionales—, y con ello las personas «desplazadas» se mantienen en una especie de «suspense», mediante el cual se ignora prácticamente su existencia legal. De esta forma, al no reconocer el estatus de apátrida, se da por hecho que esas personas deben ser repatriadas, aunque sea en contra de su voluntad. Sin embargo, como se pudo constatar una vez terminada la conflagración

mundial, la situación generalizada para todas estas poblaciones fue que los exiliados pudieron acogerse a las leyes internacionales y las comunidades de recepción aplicaron la legislación correspondiente.

Los desplazados no pueden acogerse a ningún estatus legal; se les ha privado de sus derechos humanos, en el sentido que les asigna Hannah Arendt:

[P]ierden todas sus cualidades políticas distintivas que los convierten en un espécimen de una especie llamada hombre, de la misma manera que los animales pertenecen a una determinada especie animal [...] la paradoja implicada en la pérdida de los derechos humanos es que semejante pérdida coincide con el instante en el que una persona se convierte en un ser humano en general —sin una profesión, sin una nacionalidad, sin una opinión, sin un hecho por el que identificarse y especificarse— representando exclusivamente su propia individualidad absolutamente única que, privada de expresión dentro de un mundo común y de acción sobre este, pierde todo su significado.¹

La vuelta de estos desplazados a sus regiones de origen es prácticamente inevitable y no siempre se realiza en las mejores condiciones, aun cuando se despliegan grupos de apoyo internacionales para vigilar su reincorporación.

Esta es una de las tantas consecuencias nocivas para los desplazados, pues los organismos internacionales ciertamente vigilan que sus derechos humanos no sean violados —aquellos que se les confieren por el hecho de pertenecer a la raza humana— y la comunidad de recepción los acoge bajo el imperativo de la generosidad; pero, al no otorgarles el derecho de permanencia, se les impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Como señala esta autora, se encuentran privados,

no del derecho a la libertad, sino del derecho a la acción; no del derecho a pensar lo que les plazca, sino del derecho a la opinión; es decir, se les priva del derecho a tener derecho, que significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias y un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada.²

Esta especie de «limbo legal» en el que permanecen los desplazados, marcará las condiciones de su retorno, pues con la salida de todos estos hombres y mujeres de sus comunidades se ha profundizado la destrucción del tejido social, y su reinserción se hará no solo bajo el estigma de la derrota, sino con grandes dificultades para reincorporarse y hacer valer esos derechos humanos. Los gobiernos vencedores obligarán a estos miles de personas a vivir refugiadas en su propia individualidad, mediatizando la posibilidad de expresarse y de actuar, aun cuando estos gobiernos pudiesen respetar los derechos que como humanos se les confiere.

Este nuevo fenómeno de masas solo puede comprenderse en el marco del despliegue de la globalización y de los proyectos neoliberales, cuyos imperativos se enmarcan en la necesidad de unificar al

mundo y presionar sobre las minorías, con el fin de homogeneizar a los pueblos y lograr su integración, bajo los objetivos del mercado capitalista. La reacción de los pueblos ante este proyecto castrador de las diferencias ha sido luchar por su identidad y autonomía, por todo aquello que los distingue como singulares y contra la aniquilación de su cultura. Se niegan a «llegar a condiciones que, a pesar de todas las apariencias, son las condiciones de los bárbaros».³

En este artículo pretendemos hacer un análisis comparativo de dos regiones, Kosovo y Chiapas, que si bien se encuentran alejadas geográficamente, se identifican por el grave problema de los desplazados, resultado de la ofensiva neoliberal contra los movimientos de resistencia que se pronuncian contra la unificación económica, por la democratización de sus Estados y contra las condiciones de la globalización en el nuevo contexto geopolítico que los sentenció a desaparecer como pueblos. Ambas regiones luchan por su identidad, por su singularidad, por restablecer su autonomía. No quieren ser excluidas de los proyectos nacionales, pero cuestionan la forma como los gobiernos se subordinan a los mandatos de los organismos internacionales y se insertan en la globalización, que los condena al ostracismo.

El conflicto de los Balcanes fue un claro laboratorio que puso en marcha la estrategia de los Estados Unidos. Se reforzó a la OTAN al dismantelar a Serbia, con la complicidad de los europeos y de la propia izquierda, la que, como señala Dora Kanoussi, «se ha convertido en neoliberal», al ofrecer, con su participación, «la justificación teórica y de principios a una política sin principios».⁴ Al mismo tiempo, la ONU fue subordinada a la organización bélica y se le colocó como un instrumento totalmente inoperante en la dimensión internacional. A partir de ese momento, pareció que tomaba forma la política económica y militar hemisférica de los Estados Unidos para el presente siglo.

Para desarrollar la comparación entre este caso y el de Chiapas, es necesario empezar por detenernos brevemente en caracterizar algunos aspectos de este último fenómeno.⁵

Los zapatistas y la identidad

La identidad de los indígenas en Chiapas es el resultado de un particular proceso que combina un comportamiento migratorio distinto al que presentan los demás indígenas en el resto del país —quienes en las mismas condiciones de pobreza y marginación salen hacia otros estados de la República o traspasan la frontera hacia Estados Unidos—, y que produjo en sus habitantes⁶ el reforzamiento de su apego a la tierra, a sus comunidades, costumbres y tradiciones. La

Los indígenas de Chiapas han sido un grupo humano carente de un importante conjunto de derechos que, por haber nacido en cualquier Estado, deberían poseer, más allá del escueto principio del derecho al voto.

identidad «no es algo dado o preestablecido ahistóricamente, sino una construcción que es relaborada de modo permanente como producto de la confrontación, no solo con los miembros diferenciados de la etnia, sino también con otros grupos culturales y clases sociales con los que está en permanente relación».⁷

En la selva Lacandona y Las Cañadas, región en la que se encuentran actualmente los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y parte importante de simpatizantes zapatistas, se han producido, desde principios del siglo xx y a partir de los años 50, un conjunto de movimientos que tuvieron como causa la presión sobre la tierra en la zona de Los Altos. Las propias autoridades alentaban a los tzeltales, choles, tojolabales y a los tzotziles de las tierras frías, y hasta algunos zoques, para que colonizaran la Lacandona. A todos estos indígenas se les ofreció deslindar una superficie importante de tierras en la selva fronteriza; sin embargo, los apoyos nunca llegaron y fueron ellos mismos los que se abocaron a la tarea de abrirla para el cultivo. En relación con la zona de Las Cañadas, esta empezó a poblarse en la década de los 60 con colonos tzeltales y choles, y hacia 1965 había 12 000 personas en la región. Otro fenómeno que produjo importantes movimientos hacia la selva fueron los expulsados «religiosos» que buscaron asentarse allí. Estos indígenas lograron juntar sus esfuerzos con el fin de democratizar internamente a sus pueblos.

Finalmente, habría que señalar otro tipo de movimiento hacia la selva producido en la década de los 80. Esta región fue el escenario en el que confluyeron líderes agrarios, universitarios que participaron en el movimiento del 68, maestros, catequistas, refugiados guatemaltecos, etc., personajes que, sin duda, profundizaron una politización ya percibida en las comunidades indígenas. Por todo ello no fue extraño que las autoridades federales incrementaran la militarización de la zona por considerarla un «Estado de Seguridad Nacional», no solo por sus importantísimos recursos naturales; lo que pesó mayoritariamente en dicha decisión fue el «posible peligro» que suponía la convergencia de tantos luchadores sociales.

Los indígenas de Chiapas no realizaron movimientos emigratorios ni siquiera como una «estrategia de sobrevivencia», a pesar de que las fuentes de trabajo se

fueron cerrando en los últimos años. La mano de obra guatemalteca compite por salarios aún más bajos en las fincas cafetaleras, escasean las tierras para cultivo y los vaivenes de los precios de los productos crean graves crisis. Todos estos elementos configuran el contexto que ha llevado a calificar a estas comunidades como de «alta marginalidad».

Este patrón migratorio estaría en la base de la lucha por la tierra, por la democracia, por la autonomía, y ha permitido establecer una simbiosis hombre-tierra que se refuerza mutuamente. Ni los golpes de la pobreza ni la ofensiva militar han sido suficientes para atemorizarlos ante la lucha que libran ni, por supuesto, para arrancarlos de sus lugares de vida.

Algo que merece la pena destacar es que la emigración erosiona y destruye el tejido social, poniendo en peligro la permanencia de la comunidad y el propio patrimonio cultural. El hecho de emigrar produce cambios en la percepción y objetivos de lucha de los hombres y mujeres que se trasladan hacia nuevos contextos geográficos, económicos y políticos. Aun cuando se resistan a perder su identidad, finalmente se produce un cierto alejamiento de sus tradiciones, de sus raíces. Por el contrario, los indígenas de Chiapas permanecieron en sus comunidades —lo que impidió que se perdiera la memoria colectiva— y se incentivó la lucha, con la propuesta política de autonomía y democracia. La importancia de las comunidades se potenció, pues los indígenas se sustentan en una economía comunal agrícola. Su contacto con el proceso productivo capitalista ha sido marginal y solo como estrategia para complementar sus magros ingresos.

De esta forma, se fue consolidando una identidad que ha dado paso a la insurgencia de un fenómeno caracterizado por la convivencia en la diversidad étnica, lingüística y de credos. Esta ha reforzado sus lazos histórico-culturales al grado de alcanzar una convergencia suficientemente sólida, que les ha permitido enfrentar al Estado mexicano bajo una propuesta unitaria en la búsqueda de un nuevo proyecto de nación incluyente, democrático y justo.

La Selva y Las Cañadas se fueron convirtiendo en un espacio de libertad, la «tierra prometida» que defenderán y de la que ya nadie ha podido expulsarlos. Los acontecimientos a lo largo de estos cinco años muestran que, a pesar de las ofensivas del Estado

mexicano, los zapatistas siguen defendiendo su proyecto identitario.

Autonomía y democracia

Los indígenas de Chiapas han sido un grupo humano carente de un importante conjunto de derechos que, por haber nacido en cualquier Estado, deberían poseer, más allá del escueto principio del derecho al voto. Desde el advenimiento de los llamados «gobiernos de la revolución», estos indígenas ni siquiera han podido ejercerlo libremente, pues siempre se les incautó por los caciques nombrados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nos referimos al ejercicio de la ciudadanía, entendida como la define Jorge Turner: «el conjunto de prácticas jurídicas, políticas, económicas y culturales que definen a una persona como perteneciente a una sociedad, lo cual tiene como consecuencia un flujo de recursos como personas y como grupo social».⁸ En este sentido, los zapatistas luchan por que se respeten sus derechos humanos, los que ellos mismos se han dado dentro de su comunidad, y les sean reconocidos sus sistemas normativos internos, que se expresan en usos y costumbres, garantizándose así el pleno ejercicio de los derechos humanos de los que habla Hannah Arendt.

Esto explica que el tipo de demandas y reivindicaciones del EZLN no se enmarque solo en el contexto de las necesidades básicas —tierra, trabajo, educación, vivienda, alimentación—, sino en aquellas con un profundo distintivo social, legal y político, por lo que problemas como el de la democracia, la identidad nacional, la autonomía, la ciudadanía, la desigualdad, la injusticia o la soberanía, son recurrentes en su discurso. Todos ellos se han vuelto a discutir, a partir de los 90, entre intelectuales, estadistas, sociedad civil, etc., debido a las transformaciones impresionantes que el mundo ha vivido en su conjunto, con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra fría, la globalización capitalista y la puesta en marcha del «modelo» neoliberal.

Como ha expresado el Subcomandante Marcos, para los zapatistas modernidad significa «democracia como derecho fundamental de todos los pueblos indígenas y no indígenas, pues sin democracia no puede haber ni libertad ni justicia, ni dignidad, y sin dignidad no hay nada». Los indígenas zapatistas se rehúsan a aceptar la modernidad como la forma de homogeneización con sus pretensiones castradoras de las diferencias y de las minorías, bajo el argumento de la «disfuncionalidad». Luchan por tener un papel productivo, social, de participación, pero desde una perspectiva igualitaria: «la aspiración de los pueblos

Los desplazados, nuevo fenómeno migratorio

indígenas a ejercer su derecho a la diferencia cultural pasa por que se haga efectivo su derecho a la igualdad política, económica y social»⁹ para que «todos quepamos en la sociedad».

La propuesta política de los zapatistas incluye, entre sus cuestiones fundamentales, la creación de municipios autónomos, una de las formas más valiosas que recogen sus anhelos de democracia,

para incorporar a los pueblos indígenas como partes legítimas de la República, del Estado y la Nación [...] [porque] desde la primera Constitución los pueblos indios fuimos ignorados como sujetos de derechos específicos. En cada una de esas etapas históricas, se nos dejó fuera de los gobiernos y de la toma de decisiones nacionales [...] queremos decidir por nosotros mismos la vida de nuestros pueblos, así como nuestro futuro.¹⁰

Desde el levantamiento en 1994, el EZLN ha logrado fundar municipios autónomos.¹¹ El gobierno se niega a reconocerlos y ha emprendido una lucha feroz en contra de ellos, con todos los instrumentos represivos a su alcance, para tratar de dismantelarlos: ofensiva militar, grupos paramilitares, cuerpos de seguridad pública, etc.

Las ideas zapatistas en relación con la autonomía y la libre determinación se encuentran en gran medida plasmadas en los Acuerdos de San Andrés. El documento fue firmado por el EZLN y el gobierno el 16 de febrero de 1996, después de casi cinco meses de trabajo. Sin embargo, el presidente Ernesto Zedillo los desconoció unos meses después, hecho que provocó la ruptura y estancamiento del diálogo con los rebeldes. A partir de entonces la estrategia gubernamental ha sido de acoso permanente a los indígenas.

La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir sus formas de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía, se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. La autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida nación y fortalecerá la soberanía del país.¹²

Los pueblos indios han estado subordinados a la hegemonía de una sola de las culturas, a pesar de que la nación se caracteriza por ser un mosaico cultural. Se les imponen normas de vida que chocan con su realidad cultural e histórica. Por ello, luchan porque sus formas de vida y de organización política sean incorporadas dentro del marco constitucional. Es una pretensión de igualdad jurídica que deben alcanzar todos los componentes culturales que integran la nación. No puede existir una verdadera igualdad cuando no existe

respeto a la diversidad, a la pluralidad. En materia económica reclaman la posibilidad de administrar los recursos que corresponden a las comunidades en su calidad de componentes de la nación mexicana. En la definición de un país para todos, los pueblos indígenas deben participar.

Los indígenas reclaman autonomía como una aspiración a la democracia, ya que las autoridades elegidas por ellos podrán ser sancionadas por los miembros de la comunidad cuando violen la rectitud con la que deben actuar a través de la figura de «revocación de mandato».

La autonomía por la que luchan los indígenas de ninguna manera significa independizarse de la nación, sino autoadministrar los recursos, o sea, participar directamente en su asignación y reparto. En relación con los bienes naturales, reclaman sus derechos ancestrales de uso, apropiación y conservación, que durante siglos les han sido restringidos o arrebatados. El gobierno pretende imponerles formas de posesión y propiedad de la tierra ajenas a sus legítimos beneficiarios, lo que ha provocado a lo largo de los años el incremento de los latifundios y las haciendas.

Se reclama una adecuada representación política de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y los congresos locales, con la incorporación de nuevos criterios en la delimitación de los distritos electorales que les correspondan.

Todos estos conceptos forman parte de los Acuerdos de San Andrés, los que a su vez se sustentan en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por el gobierno mexicano y que debió entrar en vigor el 6 de septiembre de 1991. El Convenio de la OIT propone que, dado que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas y tribales no gozan de los derechos humanos en el mismo grado que el resto de la población nacional, se respete a estos pueblos en su cultura, religión y organización social y económica y en su identidad propia, para que ningún Estado ni grupo se arrogue la facultad de negar la identidad con la que ellos se afirman.

El artículo séptimo señala que

los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que esto afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

¿Por qué el gobierno de México firmó un Convenio que no pensaba cumplir, y unos Acuerdos que tendrían

el mismo destino? Carlos Montemayor sostiene que el gobierno mexicano sabía que el único camino para el respeto y fortalecimiento de los pueblos indios era reconocer la autonomía y ello requería avanzar en reformas constitucionales. Y esto, nos dice Montemayor, nunca lo iba a aceptar, por lo que le apostó al agotamiento militar del EZLN en Las Cañadas, al desgaste de sus bases sociales en Los Altos y al bloqueo de nuevas bases en el Norte.¹³ Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha incrementado la presencia militar (campamentos, cuarteles, retenes, zonas militares, centros de operaciones), y sus cuerpos policiacos estatales y federales (Policía de Seguridad Pública, Policía Judicial Estatal, Policía Judicial Federal, Procuraduría General de la República), así como grupos paramilitares, los zapatistas han continuado con su proyecto político de creación de municipios autónomos y, pese al gobierno, se han mantenido en la agenda tanto nacional como internacional.

Los desplazados en Chiapas

El gobierno mexicano sabe que le será muy difícil derrotar a los zapatistas, a pesar de haber utilizado la política de desgaste en todos los sentidos. Por supuesto, ha dejado de lado un último recurso, que sería masacrarlos poniendo en marcha todo el aparato bélico, lo que hasta el momento se prevé como improbable por las repercusiones que tendría a nivel internacional y en el propio país. Los zapatistas enfrentan al gobierno a través de la resistencia civil, y han mostrado así su enorme fortaleza.

En vista de ello, el gobierno utiliza el recurso de todos los Estados antidemocráticos que no están dispuestos a negociar con los rebeldes: desplazar a la población. El desplazamiento se ha convertido en el instrumento eficaz de los gobiernos federal, estatal y municipal, para alcanzar los fines militares, económicos y políticos que subyacen en el manejo gubernamental para enfrentar el conflicto zapatista. Este puede enmarcarse en una ofensiva claramente dirigida contra las comunidades simpatizantes y bases de apoyo zapatista, con el fin último de aislar al EZLN y obligarlo a la rendición.

Los desplazados son el triste corolario de la política de confrontación del Estado mexicano. No solo es una táctica de guerra, sino que se convierte en una exigencia para tratar de fracturar el tejido social, cultural y político que ha dado fortaleza y solidez a las comunidades zapatistas, y que estaría en la base de su extraordinario movimiento.

Manuel Hidalgo y Gustavo Castro detectan algunos momentos en los que se producen los

Los pueblos no están luchando por proyectos secesionistas, sino por subvertir una realidad que ha sido marginada, en parte, del orden legal. [...] Quieren transformar el régimen actual por un Estado que haga posible la pluralidad y abra las puertas a la participación de todos los pueblos que lo conforman.

desplazamientos.¹⁴ Uno de ellos fue el 9 de febrero de 1995, cuando el gobierno intentó capturar a la Comandancia General del EZLN. Los militares recuperaron y ocuparon algunos de los territorios ganados por las fuerzas rebeldes, en 1994, en Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano y San Andrés Larrainzar. Como resultado de esta confrontación, fueron desplazadas unas 12 000 personas, que huyeron hacia las montañas o se refugiaron en comunidades vecinas. Algunos de estos desplazados —como fueron los de Guadalupe Tepeyac y Nuevo Momón en Las Margaritas— ya no regresaron a sus comunidades y hasta la actualidad estas siguen ocupadas por el Ejército, que introduce la prostitución, el alcohol, la droga. Esta ofensiva se caracteriza también por la destrucción de los cultivos, de todas las herramientas de trabajo, de los enseres de la vivienda, el robo de los documentos de identidad, como actas de nacimiento, credenciales de elector, certificados agrarios, etc. Estos militares son apoyados por los propios grupos priistas que provocan también desplazamientos de simpatizantes zapatistas. Desde 1996-97 entran en juego los grupos paramilitares —organizados y entrenados por el Ejército— que se han ido multiplicando en el transcurso de los últimos años. De acuerdo con Hidalgo y Castro, hoy se conoce la existencia de 12 grupos que tienen presencia en 20 municipios del estado de Chiapas¹⁵ y cuya finalidad no es solo tomar el control de un territorio determinado, sino paralizar los procesos productivos en manos de los indígenas. Destruyen caminos, queman viviendas, profanan templos, realizan emboscadas, atacan a todos aquellos pobladores que no pertenezcan al partido oficial. Toda esta violencia obliga a los indígenas a abandonar sus tierras y dirigirse a las comunidades más cercanas, para albergarse en campamentos cuyas condiciones son de una terrible precariedad. Un ejemplo dramático de la actuación de los grupos paramilitares fue la masacre de Acteal, en diciembre de 1997, en la que murieron 45 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos que se encontraban orando. Después de estos actos, los pobladores tuvieron que desplazarse. Su sobrevivencia es cada vez más crítica pues la comunidad receptora se encuentra enfrentada a enormes dificultades económicas y de espacio para

solventar las necesidades de todos sus habitantes. Se habla de 10 000 desplazados por ese tipo de enfrentamientos.¹⁶

Desmantelar los municipios autónomos ha sido otra vía que ha causado importantes desplazamientos. El gobierno ha utilizado tanto la fuerza del Ejército como la de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Los ataques se iniciaron desde abril de 1998 con la ofensiva dirigida contra el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, continuada por los ataques a El Bosque y San Andrés Larrainzar. Los que resultaron desplazados por esta confrontación optaron por huir hacia las montañas, donde viven a la intemperie, en condiciones muy duras y con temor a los grupos paramilitares y las fuerzas policíacas que los persiguen de manera constante. La bestialidad y desproporción de las fuerzas de seguridad pública que atacan a los habitantes de las comunidades en los municipios autónomos es inconcebible. Por ejemplo, el 10 de junio de 1998 llegaron a Unión Progreso, una comunidad de 180 personas, 56 vehículos con alrededor de 1 200 efectivos militares. Les robaron todos los animales, el dinero de las ventas del café; rompieron todo lo que encontraron a su paso; los sacos de maíz y frijoles fueron abiertos con cuchillo y desparramados por el suelo. Siete personas fueron apesadas, y unos días más tarde devolvieron sus cadáveres a la comunidad.¹⁷

De acuerdo con la investigación de Hidalgo y Castro, hasta noviembre de 1998 había 21 159 desplazados, que representaban alrededor de 4 063 familias indígenas. El 98% se identificó como opuesto al régimen o al partido oficial y pertenecía a cinco agrupaciones distintas: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sociedad civil Las Abejas, bases de apoyo del EZLN, ARIC-Independiente, y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Solo el 2% se mostró a favor del régimen: Partido Revolucionario Institucional y el presunto grupo paramilitar Paz y Justicia. Los desplazados se han instalado en 44 campamentos distribuidos en 13 municipios de los 111 que hay actualmente, por lo que el problema afecta al 11,7% de ellos.¹⁸

Las consecuencias para estos hombres, mujeres, niños, ancianos, son múltiples y van desde pérdidas

económicas (abandonar sus tierras, cultivos, dinero, herramientas de trabajo), hasta la dispersión y separación de su propios familiares en muchas ocasiones. Todos se encuentran inmersos en un terrible sentimiento de inseguridad y de zozobra, sobre todo si tomamos en cuenta que muchos han perdido sus documentos de identidad. Ya no son autosuficientes y, por lo tanto, dependen de los organismos no gubernamentales o de la sociedad civil para su alimentación, lo que afecta severamente su estabilidad emocional. Es muy común escuchar de sus propios labios expresiones como «yo no quiero vivir de la caridad pública, quiero trabajar en mis tierras, con mi familia». A través de los desplazados, se intenta minar las formas de resistencia civil de los zapatistas.

Con los desplazamientos, las comunidades han perdido la posibilidad de retomar sus principales actividades productivas, lo que les impide cubrir sus más urgentes necesidades de autoconsumo alimentario y de ingresos. Bajo estas condiciones se pretende obligar a los indígenas a recibir apoyo económico bajo diversas modalidades, como pueden ser obras de infraestructura o proyectos productivos. No es sorprendente que el gobierno esté impulsando un millonario programa productivo, financiado por el Banco Mundial, en las zonas de influencia zapatista, es decir, en 116 comunidades de Las Cañadas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, en el que participan cinco secretarías de Estado. Contempla la construcción de caminos, apoyo a la ganadería, a la caficultura, reforestación, instalación de teléfonos satelitales, etc. El gobierno está decidido a sostener estos programas aunque sea por la fuerza, por el expediente de la extrema necesidad de los indígenas. De esta forma, se utiliza la presión económica y política para estrechar el cerco en contra del EZLN y de sus bases de apoyo. Esta estrategia no es nueva en América Latina, antes ha sido instrumentada en El Salvador y Guatemala por el ejército, que al violar, asesinar y torturar a la población «aterroriza a los civiles, y el ejército puede ir aplastando la rebelión sin necesidad de enfrentar directamente a la guerrilla».¹⁹ Con los graves desplazamientos se pretende infringirle un golpe a la capacidad de lucha y resistencia zapatista.

El hostigamiento en contra de todos los municipios indígenas es permanente. Cada vez se instala mayor cantidad de retenes militares con el objetivo de amedrentar a la población, que se ve forzada a transitar por esos caminos y a quien se le exige documentos de identificación con el pretexto de encontrar las armas y explosivos que supuestamente trasiegan. Los efectivos castrenses siguen incrementando su número en la región: en 1995 había siete cuarteles militares y cinco

campamentos y para 1999 ya sumaban 26 cuarteles y 57 campamentos, con 60 000 efectivos.²⁰

El desplazamiento de la población va acompañado del encarcelamiento de indígenas. Se han registrado aproximadamente 540 detenidos en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.

Un problema acuciante para toda esta población desplazada es el retorno a sus comunidades, pues temen por su seguridad y además porque han sido despojados de sus tierras. Esto los obliga a permanecer en los campamentos en condiciones muchas veces lamentables. Se va agudizando el enorme desequilibrio económico y social de la región, como consecuencia de la manera en que el gobierno intenta completar su política contrainsurgente.

Un hecho que incorpora un factor más de conflictividad a la región y que explica la renuencia del gobierno ante el proyecto zapatista, es, según algunas fuentes, la posible presencia de importantes yacimientos petroleros en numerosas regiones habitadas por las comunidades indígenas zapatistas en el norte, el centro y el sur de la selva Lacandona, y no es casual que sea justamente en esas mismas regiones donde se ha incrementado la presencia militar y paramilitar.²¹

Kosovo y la lucha por su identidad y autonomía

En la Segunda guerra mundial, Yugoslavia fue ocupada por los nazifascistas, quienes masacraron a cientos de miles de sus pobladores; pero surgió una poderosa resistencia popular, que daría origen a un ejército guerrillero en el que participarían todas sus nacionalidades y que fue capaz de derrotar —con la conducción del croata Josip Broz, «Tito»— a las tropas alemanas de ocupación. Yugoslavia se liberó de los nazis antes de la entrada de las tropas soviéticas, en octubre de 1944, con lo que sentó las bases para su independencia de Stalin y para la «construcción de un experimento único de colaboración entre las diferentes nacionalidades, culturas y religiones en una república socialista de tipo federal».²²

Tito estableció una suerte de federalismo, sobre la base de la igualdad de las repúblicas y de las zonas autónomas. En este marco, a Kosovo se le concedió una ayuda mucho mayor para compensar su atraso relativo. Se benefició ampliamente del apoyo que le prestó la Federación y gozó de todas las libertades culturales, económicas, lingüísticas, religiosas.²³

Desde marzo de 1989, el Parlamento serbio anuló la autonomía de Kosovo y, desde esa fecha, los albaneses de esa zona se rebelaron contra la anulación del estatus que antes le concedió competencia de Estado

particular, para convertirse solo en una provincia autónoma. Su presidente, Ibrahim Rugova, buscó recuperar la autonomía (que no la independencia) mediante la resistencia civil organizada, con la creación de estructuras legales y de enseñanza, paralelas a las yugoslavas y por vías políticas y negociadas con Belgrado, sobre la base del respeto al carácter pluriétnico y pluricultural de la región autónoma. Sin embargo, Slobodan Milosevic disolvió la Asamblea y el gobierno de esa región autónoma, por medio de la represión sangrienta de todas las protestas.

Milosevic inicia una verdadera guerra de exterminio contra los albanokosovares y, ante la violencia desatada, la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza, decide resolver las matanzas étnicas a través de otras matanzas, pasando por encima de Naciones Unidas, sin recurrir al Consejo de Seguridad. El 24 de marzo de 1999 se dio la orden de comenzar la operación *Fuerza Determinada*, con la cual se cerró toda perspectiva de solución política, tanto para los kosovares como para aquellos yugoslavos que se oponían a la brutalidad y al nacionalismo de Milosevic, y que han estado a favor de reconocer la autonomía que Kosovo tuvo en tiempos de Tito.

La guerra desatada contra Milosevic por las fuerzas de la OTAN produjo una trágica cantidad de muertos, tanto serbios como kosovares, a los que se pretendía defender.²⁴

Con los desplazados se desestabilizó toda la región de los Balcanes, al agudizarse las condiciones, de por sí ya muy precarias, en que vivían desde antes de los bombardeos. Conflictos económicos, débiles equilibrios étnicos, frágiles independencias, todos ellos son problemas que sufren Albania, Montenegro, Macedonia, Croacia, Eslovenia. Países como Bulgaria y Rumania han estado afectadísimos por el conflicto, a pesar de lo cual se les obliga a pagar sus deudas externas.

Se aisló a Yugoslavia, al tener que abandonarla tanto los 1 200 observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, como todos los periodistas extranjeros que fueron expulsados por Milosevic. Ante la falta de garantías, los representantes de la Cruz Roja Internacional y de las ONG también tuvieron que dejar la región, con lo cual era difícil conocer las atrocidades del propio Slobodan Milosevic y sus huestes, y las barbaridades que la OTAN infligía a los civiles con los bombardeos.

Con los ataques de la OTAN, se eliminó a los miles de personas que votaron por la democracia en 1996 y que reclamaban respeto por los derechos humanos. Sus bombas destruyeron, en el suelo de Kosovo, Serbia y Montenegro, las semillas de la democracia.²⁵

Según Pietro de Barcellona,²⁶ se trató de una guerra contra la democracia —dados los modos de decisión,

representación, y producción del consenso— en la que no participaron ni los pueblos ni los Parlamentos, solo los jefes de Estado, con lo que se violó la Carta de la ONU. Con los ataques de la OTAN, se debilitó a la oposición y a los pacifistas en Serbia, y Milosevic se reforzó por el sentimiento de defensa nacional.

Los Estados Unidos pretenden fabricar un universo homogeneizado, no por principios de soberanía, sino de comercio, economía, finanzas, libre circulación de capitales y mercancías, y «los pueblos de los Balcanes han pagado el terrible precio de toda esta operación de protección a los intereses norteamericanos».²⁷

Ahora Europa se encuentra enfrentada con la decisión de los Estados Unidos de aceptar la partición de los Balcanes por razas; es decir, una Yugoslavia pulverizada, sin oportunidades de autosuficiencia, dividida por fronteras, en lugar de una Yugoslavia multiétnica.

En la operación emprendida por la OTAN, los Estados Unidos alcanzaron tres objetivos tácticos importantes.²⁸ En primer lugar, controlar los Balcanes, que han sido siempre un paso estratégico (hay que recordar que la Primera guerra mundial se inicia en esa región, por la importancia que tenía el dominio de los estrechos y por su situación de gozne entre el Imperio Otomano y el Austro-húngaro), y que en estos momentos, se les supedita militarmente. Así, los Estados Unidos que podrán controlar las nuevas vías de provisión de energía de Europa con nuevos oleoductos y gasoductos, haciendo superfluos el petróleo y el gas ruso. En segundo término, se buscó derrotar a Rusia como «potencia planetaria», subordinándola a la OTAN y bloqueándole posibles ventas por conceptos de gas y petróleo. Finalmente, se mandó un claro mensaje a China a través del ataque «por error» a su embajada en Belgrado.

En relación con la necesaria política de alianzas desplegada en la región, los Estados Unidos mostraron a ciertos países como Turquía, Arabia Saudita y Egipto que ellos apoyaban a las poblaciones musulmanas amenazadas en Europa; y además ampliaron la OTAN, al permitir la incorporación de nuevos miembros: Polonia, Hungría y la República Checa. Con la guerra de los Balcanes, la Unión Europea ha mostrado que está dispuesta a someterse a los designios de la Casa Blanca, al darle prioridad, en los conflictos, a las salidas militares sobre las negociadas. La OTAN se ha fortalecido con los Estados Unidos a la cabeza y con absoluta libertad para imponer sus condiciones. Pareciera, por lo tanto, que los Estados Unidos tienen todos los requisitos para convertirse en la única potencia del mundo globalizado.

Conclusiones

Podría contestar a la pregunta que se hace Alessandro Sabiucci: «¿por qué a los desplazados no se les concede el estatus de refugiados?», diciendo que los pueblos que luchan por la democracia, la autonomía y el respeto a su identidad y a sus diferencias étnicas y culturales resultan peligrosos y deben ser eliminados, porque no se someten a la voluntad de los designios del gran capital, ni a los centros de poder que dominan las decisiones. La voluntad del proyecto neoliberal, enmarcado en esta globalización de fines del siglo xx, obliga a la homogeneización de todas las regiones bajo las exigencias de la nueva división del trabajo, cuyo eje articulador es el mercado capitalista. La solidez de las luchas por la identidad y por la igualdad en la diferencia comporta una extraordinaria resistencia. Esto lo saben todos aquellos que no están dispuestos a permitir el desvío hacia proyectos alternativos. Y uno de los expedientes utilizados es el de desplazados, separándolos de sus comunidades para intentar dar el golpe de muerte a todos estos «subversivos». Por eso se evita a toda costa que, en su penoso movimiento hacia otras fronteras, puedan adquirir el estatus de refugiados, pues se encontrarían protegidos por ciertas leyes internacionales.

Los desplazados no tienen estatus jurídico y, por lo tanto, están obligados al retorno, no importa bajo qué condiciones. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Kosovo, con el regreso de cientos de miles de desplazados, lo que ha llevado a la región a una situación de total inestabilidad. Como se desprende del informe de la ONU, se admite que las tropas de la OTAN no están en condiciones de restablecer el orden.²⁹ Así se completa el cuadro de ofensiva brutal, desestabilizando a la región, obligándola a acceder al apoyo exterior —léase deudas externas para su reconstrucción—, y de esta forma entrar en el círculo del infierno de la subordinación a los grandes centros financieros del mundo: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.

En el caso de los indígenas de Chiapas, los desplazados no pasan fronteras internacionales, pero sí abandonan a sus comunidades organizadas —sustento de su identidad—, con los mismos efectos: incertidumbre, precariedad, inseguridad, zozobra, tristeza; pero, a pesar de todo, el gobierno no ha podido doblegarlos. Los indígenas desplazados de Chiapas se han negado a volver a sus comunidades, pues están convencidos de que no existe la más mínima seguridad para su retorno, además de que, al haberles robado todas sus tierras, saben que no tendrían ninguna capacidad de autosuficiencia y estarían a merced del gobierno y sus programas económicos.

La autonomía por la que luchan estos pueblos no es la independencia de la nación, como pretenden los Estados Unidos en los Balcanes, lo que favorecería la separación por razas y no por fronteras, y obligaría a una pulverización de la región, haciéndola absolutamente inviable y, por lo tanto, sometida y subordinada a los designios de los grandes centros financieros. Por eso es necesario enfatizar en que los pueblos no están luchando por proyectos secesionistas, sino por subvertir una realidad que ha sido marginada, en parte, del orden legal. Esta es una aspiración de inclusión digna, democrática, pretensión de igualdad jurídica, que debe alcanzar a todos los componentes de una nación. Quieren transformar el régimen actual por un Estado que haga posible la pluralidad y abra las puertas a la participación de todos los pueblos que lo conforman. Esta situación se contradice, obviamente, con el proyecto excluyente y privatizador del neoliberalismo. He ahí la importancia del zapatismo y de su proyecto político, ético y democrático.

Cada vez surgen más pueblos que se adhieren a los mismos ideales. Como dice el Subcomandante insurgente Marcos, «la homogeneización y la hegemonía empiezan a producir y alentar su contrario: la fragmentación y la multiplicación de las diferencias».

En el siglo XXI, proliferará la lucha de los pueblos por proyectos alternativos éticos, que pongan en el eje de sus preocupaciones la solidaridad, los derechos humanos e individuales, la diferencia. Las redes sociales y el conocimiento entre unos y otros se incrementan, por alejados que estemos. Gracias a los avances en la informática y las telecomunicaciones, están cada vez más cerca e identificados. El gobierno mexicano se niega a reconsiderar su proyecto neoliberal, aun cuando este ha tenido como resultado un gravísimo deterioro de las condiciones de vida de la población³⁰ y choca de frente con la propuesta zapatista.

Los zapatistas decidieron oponerse a las fuerzas económicas que los quisieron excluir y optaron por «la muerte para que otros vivieran». De esta forma, como dice Marcos, escriben un nuevo capítulo en la historia de los pueblos, desde «un invencible rincón de la dignidad rebelde».

Notas

1. Hannah Arendt, *Los orígenes del totalitarismo*, Ed. Taurus, Madrid, 1999, 2da. Edición, p. 381.
2. *Ibidem*.
3. *Ibidem*, p. 382.
4. Dora Kanoussi, «La guerra contra Yugoslavia», *Memoria*, México D.F., n. 125, julio de 1999, p. 21.

5. Este artículo fue escrito en el momento en que se desencadenó el fenómeno de los desplazados en las dos regiones estudiadas. En la medida en que ambos conflictos se encuentran en proceso, los nuevos acontecimientos, como la derrota electoral de Slobodan Milosevic en Serbia y del PRI en México, requerirían nuevas consideraciones acerca de sus implicaciones para la evolución de este fenómeno.
6. Véase Ana María Aragonés, «El EZLN, una historia migratoria. Puentes entre lo antiguo y lo moderno», en Dora Kanoussi, *El zapatismo y la política*, Ed. Plaza y Valdés, México D.F., 1998.
7. Maya Lorena Pérez Ruiz, «La identidad entre fronteras», ponencia presentada en el Coloquio sobre Identidades Emergentes, México D.F., octubre de 1990.
8. Citado por José Nunc, «La democracia y la modernización: treinta años después», en Gerónimo de Sierra, comp., *Democracia emergente en América del Sur*, CIIH-Coordinación de Humanidades, UNAM, México D.F., 1994.
9. Pablo Yáñez, «Globalización económica e identidad nacional», *Revista del Consejo*, México D.F., julio de 1993.
10. «Regiones pluriétnicas (una propuesta hacia la autonomía indígena)», documento presentado por el Consejo Ejecutivo del Consejo General de las Regiones Pluriétnicas de Chiapas, 1994.
11. En tres años, el EZLN logró crear los siguientes «municipios rebeldes»: Libertad de los Pueblos Mayas, Tierra y Libertad Maya, Francisco Gómez; Flores Magón; San Manuel; San Salvador; 17 de noviembre; Miguel Hidalgo y Costilla; Ernesto Che Guevara; San Andrés Sacamch'en de los Pobres; San Juan de la Libertad; San Pedro Chenalhó; San Catarina; Bovhil; Magdalena de la Paz; Jitotol; Cancuc; Ixtapa; Huituipán; Simojovel; Sabanilla; 1o. de Enero; Cabañas; Vicente Guerrero; Trabajo; Francisco Villa; Independencia; Benito Juárez; La Paz; José María Morelos y Pavón; Zinacatán.
12. Acuerdos de San Andrés, 16 de febrero 1996.
13. *Proceso*, n. 1126, 31 de mayo de 1998.
14. Manuel Hidalgo y Gustavo Castro, *Población desplazada*, CIEPAC, Chiapas, 1999.
15. *Ibidem*, p. 26.
16. *Ibidem*, p. 29.
17. Ana Colchero, «Chiapas, la sombra de la barbarie», *La crisis*, México D.F., julio de 1998.
18. Manuel Hidalgo y Gustavo Castro, *ob. cit.*, p. 37.
19. Carlos Vilas y M. Mercado, *Estado y revoluciones. Centroamérica 1950-1990*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, Colección Alternativas, México D.F., 1994, p. 169.
20. Véase la información de Gilberto López y Rivas en *La Jornada*, México D.F., 12 de septiembre de 1999, p. 20.
21. Andrés Barreda, «El petróleo que no existía», *La Jornada Semanal*, México D.F., 12 de septiembre de 1999, y *La Jornada*, México D.F., 28 de agosto de 1999. Este autor presenta un importante estudio en relación con los recursos estratégicos insertando un conjunto de mapas en los que se pueden visualizar de manera muy clara los yacimientos petroleros en las regiones zapatistas.
22. Guillermo Almeyra, «Los Balcanes, explosivo rompecabezas», *Perfil de La Jornada*, México D.F., 29 de marzo de 1999.
23. En esa región autónoma, cuna histórica de Serbia, los habitantes albanófonos son serbios islamizados y hablan un dialecto diferente al de los clanes del norte de Albania, que a su vez son diferentes de los albaneses de la costa adriática, y su nivel de vida, de cultura, y de libertades es muy superior al de la atrasada Albania. Guillermo Almeyra, *ob. cit.*
24. Se vuelve a producir ese fenómeno de masas de desplazados —ahora albanokosovares—, que en número de cientos de miles huyeron de las zonas de combate, tanto por las amenazas de las fuerzas militares, paramilitares y policíacas yugoslavas, como por las bombas de la OTAN. Se calcula que 965 000 kosovares tuvieron que huir de su provincia, 124 000 lo hicieron en los meses que preceden a la ofensiva de la OTAN, 59 000 llegaron a Macedonia después de los bombardeos, y luego se exiliaron en diferentes países, y 775 000 sobrevivían en los campos de refugiados diseminados en la región: 240 000 en Macedonia, 440 000 en Albania y el resto se reparte entre Montenegro y Bosnia. No se planeó nada para brindar ayuda moral y material a los centenares de miles de desplazados, y los campos de refugiados mostraban las terribles condiciones de existencia de toda la población. Véase Anne Marie Mergier, «El enfrentamiento entre la OTAN y Yugoslavia incrementa la desestabilización política y social en los Balcanes», *Proceso*, México D.F., n. 1174, 2 de mayo de 1999, pp. 48-51.
25. Anne Marie Mergier, «Testimonio de sobrevivientes permiten asomarse a la situación de la Yugoslavia bombardeada», *Proceso*, México D.F., n. 1173, 25 de abril de 1999, pp. 44-8.
26. Pietro de Barcellona, «La verdad bombardeada», *Memoria*, México D.F., n. 125, julio de 1999.
27. Anne Marie Mergier, «El enfrentamiento entre la OTAN y Yugoslavia...», *ob. cit.*
28. Alessandro Sabiucciu, «Una guerra texana para cancelar a Europa», *Memoria*, n. 125, julio de 1999.
29. *La Jornada*, 21 de noviembre de 1999.
30. Un informe del Banco Mundial indica que 40 de cada 100 mexicanos sobreviven con un ingreso diario que no supera los dos dólares, lo que coloca el ingreso per cápita del país por debajo del de las principales economías de América Latina. El 14,9% de los mexicanos sobrevive con un ingreso diario menor de un dólar. Esta situación coloca a México en situaciones similares a la de Rumania y Venezuela, donde el 17,7% y el 11,8% de sus habitantes, respectivamente, sobrevive con ingresos diarios menores a un dólar estadounidense. Véase *La Jornada*, 17 de septiembre de 1999, p. 24.